



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: **11001-33-35-026-2021-00002-00**
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
DEMANDANTE: **MARTHA CECILIA MOSQUERA QUIÑONES**
DEMANDADO: ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS
DE SOACHA

Dentro del presente asunto, la abogada **DIANA PATRICIA CAÁERES TORRES**, presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en representación de la señora **MARTHA CECILIA MOSQUERA QUIÑONES**, ello con la finalidad de obtener la nulidad del **oficio No. G-0281-2020 de 29 de abril de 2020**, por medio del cual niega a la actora el reconocimiento y pago de derechos laborales, como consecuencia de la presunta existencia de un contrato realidad.

Ahora bien, este despacho observa que no es posible admitir la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, se debe recordar que, a través del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

De la misma manera, y a través del decreto 417 de 2020, el Gobierno nacional adoptó varias medidas encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad de los servicios de justicia prestados por entidades del ejecutivo y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional a través del decreto 806 del 4 de junio de 2020, adoptó las medidas necesarias para la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizando de esa manera, el trámite de los procesos

judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria. Ello, con el fin de garantizar que los sujetos procesales puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o no se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, el ejercicio de los derechos y de la misma manera, se evite la aglomeración de personas en los despachos y centros de servicio judiciales, una vez fuera levantada la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo tanto, y dando aplicación a lo establecido por la ley 1437 de 2011, el decreto 806 de 2020 y la ley 2080 de 2020, este despacho judicial **INADMITIRÁ LA DEMANDA**, por las siguientes razones:

1. Del acto administrativo a demandar

De igual manera, al proceso deberán estar arribados el o los actos administrativos a demandar y de los cuales se pretenda la nulidad, siendo esto esencial, pues estamos frente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde la pretensión principal debe ser la nulidad de un acto proferido por la administración y frente al cual debe ser estudiada su legalidad.

Lo anterior, por cuanto la apoderada judicial de la parte actora si bien aportó el acto administrativo demandado, este se encuentra incompleto o en su defecto en desorden, lo que hace imposible que la lectura de este se realice en forma adecuada, pues es palmario que no tiene una secuencia ordenada.

Razón por la cual, la profesional del derecho deberá aportar al plenario copia clara, legible y de forma **organizada** del **oficio No. G-0281-2020 de 29 de abril de 2020**.

2. De la reclamación administrativa

De la misma manera, la profesional del derecho deberá arribar al plenario copia clara, legible y de forma **organizada** de la petición radicada ante la entidad, mediante la cual solicita el reconocimiento y pago de unos emolumentos como consecuencia de una presunta existencia de un contrato realidad. Lo anterior, por cuanto en el plenario, si bien se evidencia dos peticiones elevadas, ninguna de ellas tiene una secuencia clara, lo que genera una difícil lectura de estas y la imposibilidad de verificar si lo reclamado ante la entidad tiene que ver con lo que se reclama ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

3. De la dirección de notificaciones judiciales

El artículo sexto del decreto 806 de 2020, señala:

“Artículo 6. Demanda. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda”.

Sombreado y subraya fuera de texto

Por lo anterior, y al tenor de lo dispuesto en la norma *ibidem*, encuentra el Despacho que, en el ítem de notificaciones de la demanda, la apoderada no registró la dirección de correo electrónico de la demandante, y en este sentido no se cumple a cabalidad con lo establecido en la norma antes endiligada.

Por ende, se deberá indicar el canal digital y/o correo electrónico de notificaciones, en donde la demandante, directa y efectivamente, podrá recibir notificaciones judiciales, sin que pueda ser la misma del apoderado.

Teniendo en cuenta lo anterior, en aplicación al artículo 8° de la norma antes señalada, el apoderado judicial deberá afirmar bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes.

Así las cosas, la demanda presentada por la apoderada judicial de la actora no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la ley 1437 del 2011, ley 1564 del 2012, decreto 806 de 2020 y ley 2080 de 2020, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO. - INADMITIR LA DEMANDA instaurada por **MARTHA CECILIA MOSQUERA QUIÑONES**, contra de la **ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA**.

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO. - Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá acreditar el envío de la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído, a la entidad demandada a través de correo electrónico de notificaciones judiciales.

Sin embargo, de no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

20



Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cefbe7e40cbf2a2b822a8ce8a79681d820106ef02259023a159b573f3efeed79**

Documento generado en 02/03/2021 12:21:25 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>